04

**LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA
DE DESTITUCIÓN POR ERROR INEXCUSABLE VULNERA LA
INDEPENDENCIA DEL JUEZ**

LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

DE DESTITUCIÓN POR ERROR INEXCUSABLE VULNERA LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ

THE ADMINISTRATIVE PENALTY OF DISMISSAL FOR INEXCUSABLE ERROR VIOLATES THE INDEPENDENCE OF THE JUDGE

Juan Alcívar Sarango Rodríguez¹

E-mail: juan.a.sarango@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5016-1142>

¹ Universidad Metropolitana. Ecuador.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Sarango Rodríguez, J. A. (2020). La sanción administrativa de destitución por error inexcusable vulnera la independencia del juez. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 3(1), 23-30.

RESUMEN

Con la aprobación y vigencia de la Constitución de la República del 2008, se han ejecutado una serie de reformas legales, donde se incluye y es el objeto de nuestro trabajo, la sanción disciplinaria de destitución al juez por incurrir en error inexcusable contemplado en el artículo ciento nueve numeral siete del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, cometer el juez falta gravísima en el cumplimiento de su deber a través de sus actuaciones en la tramitación y resolución final de una causa que conoce. Se emplearon métodos la revisión bibliográfica, el hermenéutico y el Derecho comparado.

Palabras clave:

Error inexcusable, independencia, administración, justicia, sanción.

ABSTRACT

With the approval and validity of the Constitution of the Republic of 2008, a series of legal reforms have been executed, which includes and is the object of our work, the disciplinary sanction of dismissal to the judge for incurring in inexcusable error contemplated in the article One hundred and nine numeral seven of the Organic Code of the Judicial Function, that is, committing the judge is extremely serious in the performance of his duty through his actions in the processing and final resolution of a case he knows. Methods of literature review, hermeneutics and comparative law were used.

Keywords:

Unexcused error, independence, administration, justice, sanction.

INTRODUCCIÓN

A partir del 2008 se inicia en América Latina una etapa de reformas judiciales, liderado por varios países sudamericanos, entre ellos el Ecuador que aprobó una Constitución innovadora con cambios importantes en materia de justicia, entendiéndose por muchos que estos cambios van en pro de los derechos humanos, para dar mejores garantías y fortalecer el poder judicial.

En el Ecuador, se está cumpliendo con la independencia jurisdiccional en la administración de justicia por los jueces de derecho; es necesario que se reforme el error inexcusable que se aplica a los jueces como sanción administrativa de destitución por el órgano de gobierno, control y vigilancia de la Función Judicial, y lograr verdadera independencia judicial, libre de injerencia y del poder político del gobernante y de las instituciones, en una especie de lucha contra la corrupción.

En tal sentido, autores como Medina, et al. (2017), refieren que a la corrupción se le puede considerar como *“un hecho social con un carácter socio-histórico resultado de la actividad humana misma, estrecha mente ligado al sistema de necesidades sociales. A las necesidades se les consideran como cualquier factor interno o externo que incita al hombre a la acción, independientemente de su voluntad. Ellas juegan un importante papel en la regulación axiológica de la personalidad”*. (p.2)

La Constitución de la República del Ecuador (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), señala que la facultad de administrar justicia emana del pueblo y la ejercen los órganos de la Función Judicial y demás instituciones públicas que lo determina la ley. La Función judicial gozará de independencia interna y externa en sus resoluciones, lo que significa que ninguna otra institución del estado pueden interferir en las funciones y atribuciones de los jueces. Esta independencia la reconoce la Constitución de la República, los Tratados internacionales de derechos humanos. El Código Orgánico de la Función Judicial (Ecuador. Asamblea Nacional, 2009), ha tipificado las infracciones gravísimas, en las que pueden incurrir los jueces cuando administran justicia; y entre estas está el error inexcusable.

El objetivo de nuestro trabajo, será realizar un análisis jurídico de la sanción disciplinaria de destitución al juez por incurrir en error inexcusable contemplado en el artículo ciento nueve numeral siete del Código Orgánico de la Función Judicial

DESARROLLO

Si partimos de la era republicana del Ecuador en lo relacionado en la administración de justicia podemos determinar que esta se ha venido desarrollando conforme a la estructura del Estado, dependiendo de la corriente política que se encontraba en el poder; la Función legislativa y Ejecutiva han jugado un papel preponderante

en este aspecto. Con la aprobación y vigencia de la Constitución de la República del 2008 Ecuador (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), previa consulta del pueblo, dio su aval para el cambio creando una nueva Constitución y como tal un nuevo paradigma en la administración de justicia.

Hoy, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano. En tal virtud urge la necesidad de adecuar las normas jurídicas a la nueva visión constitucional, procurando mejorar la vida en todos los aspectos de los ciudadanos. Sin embargo, como las leyes que se crean para que rijan la conducta de los pueblos dependen de la clase política que se encuentre en el poder, cuya competencia para crearlas o derogarlas las tiene la Asamblea Nacional.

La Función Legislativa tiene competencia para crear, modificar y derogar las leyes; y lograr la paz social y el bienestar común de la población; las leyes que se crean guardarán armonía con la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Con la expedición del Código Orgánico de la Función Judicial (Ecuador. Asamblea Nacional, 2009), se procura mejorar la administración de justicia en favor del pueblo; la principal novedad para elaborar este trabajo es el tema de la falta de independencia jurisdiccional de los jueces para la administrar de justicia. En vista del temor de perder sus cargos por los sumarios administrativos que inician por la actuación irregular de las juezas y jueces ya sea por denuncia o de oficio. Puesto que el Consejo de la Judicatura, tiene potestad para sancionar a los servidores judiciales por faltas gravísimas cometidas en el cumplimiento de su deber y tipificadas en el Código de la materia y en el Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria.

La Función Judicial, es según Moreno (2013), la encargada de administrar justicia, para lograr el equilibrio en la convivencia social, precautelando el bien común y la paz colectiva, pero con la independencia absoluta de las otras dos Funciones. Los dos principales retos que tiene ante sí la Función Judicial, es la de ser a la vez un órgano o poder público democrático e independiente de los demás órganos o poderes públicos a los que tiene el deber de controlar: a. Democrático, califica la situación de una colectividad, cuya estructura radica en el gobierno del, por y para el pueblo; y, b. Independiente, caracteriza la situación de una colectividad en este caso el poder público, que no está sometido ni subordinado a la autoridad de otro y como tal no depende del mismo.

La reforma judicial que se dio en México en 1994 y 1995 se la considera como efecto y como causa del mismo proceso democratizador al reconocer a la Función Judicial que será democrático e independiente para poder defender las garantías constitucionales incluida la protección de los derechos y la división de los poderes; así como para

poder defender los conflictos entre los demás poderes públicos. Por ello cada Estado, debe lograr a través de la reforma judicial, la independencia de los operadores de justicia frente al poder político y económico, puesto que la sociedad demanda que la administración de justicia sea cada vez más efectiva.

En este orden, Ochoa (2011), explica que la Función Jurisdiccional, es el máximo órgano de Justicia del país, se eligió a través de la apatía y el desinterés de la clase del Derecho, del pueblo y aún, de las propias autoridades en función. La Función Judicial existe en el Ecuador desde antes del nacimiento de la República, pues data de 1821 cuando se expide la Constitución de Cúcuta de ese año y se establece el Poder Judicial. Montesquieu, a quien se considera el creador de la división del poder político del Estado, Moreno (2013), plantea que, el poder judicial nació casi nulo; sin mayor explicación y ninguna luz de liberación de las otras dos. ¿Será por esa razón que en el Ecuador jamás se ha intentado ni se ha logrado la independencia de esta alta función desde 1830?

El jurista Moreno (2013), continúa validando que *“en las cartas magnas del país, sin excluirse, la Función Jurisdiccional ha sufrido de un mal innato, convirtiéndose en estrategia política o un mecanismo de ataque contra los enemigos políticos, puesto que la Corte Suprema, organismo máximo de administración de justicia del país hasta 1998, fueron designados por las tres funciones del Estado existentes hasta ese entonces o se distribuían en cuotas entre el ejecutivo y legislativo, cuando las fuerzas políticas estaban equilibradas, por lo que se obtenía una Función Judicial sumisa al poder político de la época”* (p.12)

Sobre la Función Jurisdiccional, Larrea (2000), señalaba *“que se trata de una función independiente, apolítico y organizada jerárquicamente, con poca posibilidad de innovar el derecho; la reforma de 1998 procura realizar la total unidad de la Función Judicial, desligando de la independencia de la función ejecutiva o de la especial independencia de los tribunales militares y policiales, para que todos los organismos de justicia formen propiamente parte y exclusivamente dependan de la Función Judicial como ya se lo ha logrado con la actual Constitución de la República”* (p.23)

La Función Judicial del Ecuador en La Constitución de la República del 2008. Hasta la Constitución del 2008 (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), el Ecuador era un Estado liberal de Derecho, el poder público actúa conforme a la Ley, es el Gobierno de la Ley, antes de 1998 la norma queda excluida de todo control, fue el reino de la Ley, norma general y abstracta. El Estado, según Zavala (2009), así concebido se caracterizó por:

- a. El reconocimiento del carácter normativo superior de la ley.
- b. La aplicación de la Constitución a través de la Ley.

- c. la Jurisprudencia interpretativa de la Ley, por recurso de casación.

La carta magna ecuatoriana (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), origina cambios trascendentales con relación a la vida de los ciudadanos, aquellos cambios relacionados a la creación de dos funciones más del Estado como son la Función de Transparencia y Control Social y la Electoral resultando en la actualidad las cinco funciones del Estado; y, entre otros a la reforma de la Función judicial, que se fijan nuevos paradigmas en la administración de justicia a lo relacionado a la justicia constitucional, lo que significa un progreso mayor en la protección de derechos de los ciudadanos.

Zambrano (2011), señala, manifestando en lo que se debe estar de acuerdo en que la Constitución de la República: *“significa un formidable avance y marca el punto más alto del constitucionalismo ecuatoriano por ser plenamente incluyente con los diferentes grupos sociales que forman parte de la realidad ecuatoriana, parecido, pero no igual a la de todo el texto latinoamericano. Muchas de las novedosas instituciones no nacieron de la discusión de los juristas sino de las propuestas de los movimientos sociales, principalmente de los indígenas”* (p.8)

Siguiendo a Ávila (2011), los principios que sustentan al Estado son tres: legalidad, transparencia y responsabilidad. Sobre la legalidad, Zambrano (2011), puntualiza:

1. Es el sometimiento de todo el poder público a la ley y resulta que actualmente los poderes públicos tienen competencias para actuar no determinadas en normas, es decir, las leyes no dicen lo que hay que hacer, sino que otorga poderes para hacer.
2. Transparencia, por este principio todos los actos del Estado deben ser públicos y pueden ser conocidos por todas las personas.
3. Responsabilidad, todos los funcionarios y los agentes privados que provoquen daños deben responder a la justicia. (p.33)

A la vez la Justicia, constituye la gama de obligaciones y facultades asignadas por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El Código Orgánico de la Función Judicial (Ecuador. Asamblea Nacional, 2009), el Código Orgánico General de Procesos y las restantes leyes que le sirven al juez para recurrir acertadamente garantizando y reconociendo el derecho que a cada quien le corresponde y obrar con legitimidad, resultando el que da cumplimiento a que en el Ecuador se dé la oralidad en la administración de justicia, en este caso el nuevo código da paso a la oralidad en materia civil y en todos los ámbitos.

Según Valle (2007), pueden los jueces cometer errores, no es dudoso que los operadores de justicia adopten resoluciones que podrán ser calificadas como errores; sin embargo, se trata si es el propio sistema jurídico que

permite afirmar que esas resoluciones están en el sistema decisiones erróneas.

Siempre que exista una instancia superior es posible que al examinar y resolver lo que dictaminó el juzgador de instancia inferior determine que se ha equivocado, si esta decisión respecto del error del juez inferior es simplemente el fundamento de autoridad. La opinión del Juez Superior, sobre la del inferior así puede implicar en realidad, la decisión, que el operador de justicia de primera instancia se ha equivocado y en qué criterios.

Este problema es próximo a la temática de lo que se conoce como lagunas del derecho. Para Valle (2007), la legislación es dentro del sistema sólo periferia porque requiere del control y sanción judicial. De acuerdo a la Corte Constitucional del Ecuador la independencia externa, se refiere al papel de los jueces frente a circunstancias ajenas a sus funciones jurisdiccionales, como, por ejemplo, la intromisión de los poderes Legislativo y Ejecutivo en la Función Judicial. Mientras que la independencia interna es igualmente importante para el funcionamiento justo y eficiente del sistema de justicia.

En la Acción Extraordinaria de Protección, se refiere a la auto reglamentación de los jueces y sistema de tribunales, es decir, a la influencia de factores internos dentro de su función que puedan alterar su libertad de decisión. Al describir la independencia judicial se ubicará tanto en el plano institucional como en el plano del Juez. La Función Judicial según Párasa (2013), *“podrá gozar de la independencia sin la injerencia extraña esto es del poder político y económico. En el plano del Juez, la independencia será no existir relaciones que lo conlleven a fallar en un aspecto de favorecer a uno de los litigantes, lo que significaría imparcialidad total al resolver las disputas que están en su conocimiento”*. (p.26)

Según se establece en el Código Orgánico de la Función Judicial (Ecuador. Asamblea Nacional, 2009), *“los decretos de los jueces dictaminados en los procesos judiciales de cualquier diversidad únicamente podrán ser examinados por medio de los recursos de impugnación ordinarios y extraordinarios, instaurados en la ley. Ninguna institución del poder público de la República del Ecuador tiene la potestad para inmiscuirse en las decisiones que adopten dentro de sus competencias los órganos jurisdiccionales, es decir al Consejo de la Judicatura le está prohibido intervenir en los asuntos judiciales y peor incidir en su trabajo referido a la administración de justicia”*. (p.12)

Partiendo de un análisis conceptual según lo recogido en el Diccionario de la Real Academia Española (1992), el error proviene del latín error, -oris, expresándose acción desacertada o equivocada, sentencia equivocada o falsa, cosa hecha erradamente, vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe, que anula el acto jurídico si afecta a lo esencial de él o de su objeto. Es decir que por error debiéramos entender sintéticamente

como falta, desacierto, inexactitud, descuido, equivocación y por difusión criterio o juicio falso. El sencillo abordaje del concepto general de error, lo enlazaremos con la palabra judicial, a fin de determinar e iniciar el esbozo del concepto de error judicial, ampliamente referenciado por la doctrina jurídica, entendiéndose (lo judicial), como aquello concerniente o relativo a la administración de justicia o a la judicatura.

Son varios los autores que de distintas maneras han conceptualizado el error, entre ellos: Cabanellas (1993), el error judicial es en sentido amplio, toda desviación de la realidad o de la Ley aplicable en que un juez o tribunal incurre al fallar en una causa, Arévalos (1999), lo enuncia como un error que da origen a la responsabilidad del Estado y de los funcionarios en relación a las actuaciones jurisdiccionales contrarias a la Ley y error inexcusable.

Esta declaración siguiendo a la historiografía jurídica, posee sus bases en el derecho español judicial en la centuria XIX, aludiendo en términos generales a la referencia a omisiones graves, evidentes e imperdonables, que pueden comprender tanto la negligencia, como la falta de pericia, por notoria falta de conocimientos. El término error inexcusable se compone de dos vocablos: Error: Concepto equivocado o juicio falso, acción desacertada o equivocada, cosa hecha erradamente e Inexcusable: Que no puede eludirse con pretextos y no puede dejar de hacerse, que no tiene disculpa. Un error inexcusable. Sin excusa.

Diferentes cuestionamientos por parte de profesionales de la rama del derecho en el Ecuador, suscitó la inserción de la figura del error inexcusable como infracción disciplinaria que conllevaría a la destitución del servidor judicial, en el Código Orgánico de la Función Judicial (Ecuador. Asamblea Nacional, 2009), en su articulado 109 numeral 7, tras aprobarse en febrero del 2011 con el plebiscito y consulta popular, sintetizado los mismos al no poseer una dimensión clara de esta figura y sus posibles efectos nocivos. En el Ecuador, su jurisprudencia emite desde su Carta Magna de 1998, el pronunciamiento en el sentido de que el error judicial es fuente de responsabilidad estatal y debe estar revestido del carácter de inexcusable, a la vez lo trata como una causa de sanción administrativa al funcionario judicial ecuatoriano ya aprobada en el 2011.

Este error puede verse a la luz diaria como un aspecto técnico sencillo y fácil de definir, pero no es así, refiriéndonos a la alta carga contaminante subjetiva que se mueve alrededor de esta figura y sus implicaciones, evaluando empíricamente que al respecto existe temor doctrinal y en la praxis, mereciendo un conjunto de estudios desde las diferentes aristas científicas. De esta manera coincidimos con el concepto dado por García (2013), al definirlo como *“ignorancia atrevida y en este caso el error cometido no se puede excusar... es decir, en términos mayores afirmaríamos que es una clase de error categorizado por*

no poder justificarse, no admite fundamentos ni términos de aceptabilidad o justificaciones y con una carga importante de defensa ante lo ilógico”. (p.5)

Comúnmente se clasifica en: error de hecho, error de derecho, error improcedendo, error indicando. Saber delimitar técnicamente entre los errores de hecho y de derecho, constituye en no pocas oportunidades en nuestra ciencia jurídica, aspectos pendientes a dominar, lo cual conlleva indirectamente a ofrecer juicios desacertados con su correspondiente efecto nocivo, motivado a que su delimitación hay que encontrarla en el vínculo con las evaluaciones mentales a través de los que el juzgador dicta el fallo. Al definir al error de hecho, podemos detallar que este se manifiesta sobre una situación concreta, expresa el conocimiento con vacíos sobre las personas o las cosas, al igual del desconocimiento de que se haya producido o no un acontecimiento; así como el error de derecho perjudica exclusivamente a las premisas, a través de las que se interpreta normativamente los hechos y actos percibidos con la finalidad de evaluarlos y enlazarlos, en su caso, la consecuencia prevista en norma.

Cronológicamente y desde la doctrina, se hace necesario comentar las clasificaciones de los errores de derecho. En este caso específicamente haremos alusión a los errores in procediendo, quienes surgen cuando las conductas de las partes en litigio no adecuan su actuación a las normas y reglas de procedimiento, originando la nulidad insanable del proceso y los errores injudicando, los cuales afectan al manejo del procedimiento, constituyendo una infracción al iuris procedendi.

García (2013), plantea desde el punto de vista conceptual las diferencias entre los errores inexcusables tanto de forma como de fondo. El Error Inexcusable de Forma, cuando no lesiona la sustancia de la decisión, este tipo de error podría conducir simples responsabilidades administrativas; los casos típicos son el error material por omisión o por equivocación, es decir que este tipo de error puede ser subsanable sin necesidad de recursos ordinarios y extraordinarios establecidos en la Constitución y la ley y el Error Inexcusable de Fondo, constituye un error inexcusable de fondo, cuando la lesión se inferir a la sustancia, no impedir es fácilmente imperceptible, se presta a la duda y puede acarrear consecuencias irremediables; pueden ser por omisión o por equivocación, al igual que los errores excusables, pero sus consecuencias son irremediables.

En este sentido cabe destacar que el Error Inexcusable de Forma puede ser subsanable sin necesidad de recursos ordinarios y extraordinarios establecidos en la Constitución y la Ley. Entre los ejemplos que menciona el autor, esta falta de fecha o de la firma del juez o del nombre de alguna de las partes, error aritmético, que sin fácilmente advertibles y subsanables, así como continuaría alertando García (2013), que en el caso del error inexcusable de Fondo: *“acarrearía culpabilidad contra*

los operadores de justicia de índole administrativa, civil o penal, ya que su actuación al ser examinadas por la instancia superior a través de los recursos de impugnación, determinaría el grado de responsabilidad. Entre lo más común que se pueden dar de acuerdo al autor es la incompetencia del juez al dictar sentencia y la incongruencia en la resolución final”. (p.13)

La responsabilidad de un juez se ve afectada cuando existe desconocimiento de prescripciones legales elementales o de los principios generales que guían el Derecho, y también la arbitraria valoración de la prueba, palpándose a modo de ejemplos cuando existen normas derogadas y se aplican o de una expedida pero no vigente aún. En el territorio ecuatoriano, la acción regresiva contra el juez (funcionario) presupuesta contra el Estado, es originada por el error judicial, demora injustificada o inapropiado, administración de justicia, violación de los derechos a la tutela judicial efectiva y por violatorias de los principios y reglas del debido proceso, siendo el legitimado pasivo la Presidenta (e) del Consejo de la Judicatura y su representante legal el Director (a) de este órgano, no obstante para efectos de repetición de lo pagado, el Consejo pide al juzgado de la causa que se cuente como parte procesales con las servidoras (es) que hayan participado en los actos que se manifiestan como violatorios de los derechos del perjudicado.

El Estado repetitivamente accionará sobre lo pagado por el en contra del juez, el cual deberá evidenciar o mostrar en el proceso, que las acciones que originaron los perjuicios no ocurrieron por dolo o acciones negligentes, sino, acaso fortuitos o de causa mayor. Sobre este enunciado compartimos las aseveraciones realizadas por la Constitución (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), porque si el error judicial no se debe al dolo o negligencia, se borraría la ilicitud de la actuación del juez, sin hacer desaparecer el perjuicio, situación por la cual responde el Estado pese a la licitud, y si el perjuicio se debe al dolo o negligencia del funcionario-juez, igual paga el Estado, pero el funcionario-juez debe rembolsar lo pagado por el Estado.

Al analizar críticamente los articulados 32 y 33 del Código Orgánico de la Función Judicial (Ecuador. Asamblea Nacional, 2009), nos emite una primera impresión que se abordan dos procesos de conocimientos antes los jueces de lo contencioso administrativo, el primero con el interés de declarar la responsabilidad del Estado y la condena de los daños y perjuicios y el restante, la acción de petición de lo pagado por el Estado al utilizar una expresión en el pasado, con la finalidad del que el funcionario-juez que no demuestre que su error, se deba a una fuerza mayor o caso fortuito, reembolse lo que el Estado ha pagado.

En este ámbito se hace obligatorio referirnos a dos doctrinas indispensables a precisar: la teoría subjetiva o clásica de la culpa y la objetiva o de riesgo. La primera hace alusión a que la responsabilidad civil se encuentra en la

conducta del autor del daño, determinando que para decidir si se está en presencia de responsabilidad no basta con que se persone el daño, sino que sea imprescindible que el mismo halla sobrevenido de un actuar doloso o culposo del sujeto generador, mientras que la restante expresa que la incumbencia la encontraremos en el hecho que produce el final dañoso, sin importar culpa o dolo evidente.

Es necesario referirse a la responsabilidad civil objetiva en el contexto ecuatoriano, partiendo de lo dispuesto en el numeral 9 del articulado 11 de la Constitución de la República (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), donde se plasma la responsabilidad civil, así como la responsabilidad del daño se produzca cuando los jueces, en ocasión del ejercicio de sus funciones que les están atribuidas, causan un daño que les obliga a la correspondiente restauración, así como: el origen en un veredicto judicial penal o al nacer de un acto jurisdiccional civil, siendo primordial exhibir, el error en que ha incurrido el juez, quien responderá civilmente por ello y que la consecuencia ha sido el daño o perjuicio irreparable.

En otro orden analítico, es importante acotar a pesar de lo expresado, que la conducta culposa, constituye la partida de la responsabilidad individual del funcionario para repetir lo pagado por el Estado, según lo establecido en el Art. 33 del Código Orgánico de la Función Judicial (Ecuador. Asamblea Nacional, 2009), en la que el estado ejerce el derecho de repetición por los daños producidos por su actuación irregular lo que significa que el funcionario público es responsable en los ámbitos administrativo, civil y penal por la indebida prestación del servicio público, compromete al estado el que reparará al afectado y luego hace efectivo sobre el servidor público el derecho de repetición.

Nuestro objeto de estudio se aborda desde diferentes concepciones doctrinales jurídicas en países de la región, partiendo de sus constituciones y legislaciones conexas. Se destaca el análisis realizado por Mosset (2005), donde demuestra que en Argentina no existe reparación del error judicial como recurso ni como acción o demanda, existiendo aislados antecedentes en normas provincianas por los errores de tipos penales, en Chile se adquiere una responsabilidad civil muy limitada y con un antejuicio de admisibilidad, recayendo la misma en los jueces de manera directa y no así en el Estado, debiendo obedecer sus actuaciones a actuaciones dolosas (como por ejemplos: cohechos, prevaricación, etc.) o negligencias.

Sin embargo, en la legislación colombiana al decir de Bermúdez (2010), se acoge a la teoría moderna de la responsabilidad que ya no se desarrolla de manera conceptual sobre la culpa que se fundamenta a partir del daño. En este aspecto, al estudiar la misma sentencia del Consejo de Estado Colombiano, refiere que se hacen referencias sin establecer diferencias ni distinciones de ninguna naturaleza a la acción u omisión de las autoridades

públicas, permitiendo inferir que dado a lo genérico de esta expresión, las autoridades judiciales se incluyen como autoridades públicas y por ende, con sus actos u omisiones pueden generar la responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos causados.

López (2007), señala que *“el 14 de junio de 2002 se reforma el Art. 113 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en la que incorpora a su sistema jurídico la responsabilidad patrimonial del Estado directa y objetiva por actividad administrativa irregular. Esta responsabilidad se ejercerá si los poderes del estado provoquen afectación a las personas en su patrimonio por las acciones incorrectas en su función”*. (p.111)

La responsabilidad administrativa se produce cuando un funcionario en el desempeño de su empleo no se ajusta a las obligaciones previstas en la ley y por actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. La responsabilidad que pudiera surgir de los servidores públicos del poder judicial, ministros, magistrados, jueces puede encuadrarse en cualquiera de las modalidades de responsabilidad que consagra tanto la constitución como legislación secundaria sobre la materia. Es decir, que todo funcionario público responde por sus actos ya seas como acción u omisión.

El deber del Estado es reparar a los ciudadanos sobre las afectaciones materiales e inmateriales que se les hayan causado en lo patrimonial o extramatrimonial por una sentencia dictada erróneamente, cuando se causa daño se origina un deber de indemnizar al afectado incluyendo una pena al responsable. Las causas más frecuentes que originan error judicial son según López (2007), la errónea apreciación de los hechos, equivocada subsunción de circunstancias fácticas la hipótesis normativa, utilización errónea de normas legales, incompetencia técnica, falta de experiencia, ausencia de prudencia, precipitación y la deshonestidad.

CONCLUSIONES

En el derecho ecuatoriano estamos en presencia de que el Consejo de la Judicatura, para sancionar por error inexcusable se inmiscuye en asuntos jurisdiccionales, aspecto violatorio de derechos en primera instancia, incidiendo en esto que quienes aplican la norma lo hacen de manera errada por la falta de experiencia y deficiente preparación profesional.

A su vez, en la práctica no se cumple con la independencia interna y externa garantizada en la Constitución y en la Ley, lo que hace necesario se reforme el Código de la materia y así garantizar la tutela efectiva de los derechos y la seguridad jurídica en la administración de justicia. El Consejo de la Judicatura destituye a los jueces aplicando el error inexcusable inmiscuyéndose en asuntos jurisdiccionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arévalo, H. (1999). Responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.
- Ávila, R. (2011). El neoconstitucionalismo transformador: el Estado y el derecho en la Constitución de 2008. Abya Yala.
- Bermúdez, M. (2010). Responsabilidad de los jueces y el estado. Bogotá: Editorial Librería profesional
- Cabanellas, G. (1993). Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta S.R.L.
- Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial 449. http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
- Ecuador. Asamblea Nacional. (2009). Código Orgánico de la Función Judicial. Registro oficial Suplemento 544. https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cofj.pdf
- García Falconí, J. (2013). El error inexcusable en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Revista Jurídica Derecho, 12(3).
- Larrea, J. (2000). Derecho constitucional. Quito editores.
- López Olvera, M. (2007). La responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
- Medina, R., Zambrano, S., Coello, J., & Medina de la Rosa, R. E. (2017). La Corrupción. Análisis espistémico desde lo social, axiológico y jurídico. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales. <http://www.eumed.net/rev/cccss/2017/02/lacorrupcion.html>
- Moreno, D. (2013). La función judicial. Revista judicial, 23(12).
- Mosset, J. (2005). El error judicial. Editorial Rubinzal-Culzoni.
- Ochoa, A. (2011). Análisis de eficacia en la ejecución del gasto administrativo, la planificación y las finanzas del Consejo de la Judicatura, distrito Cañar 2007-2010. (Tesina previa a la obtención del Título de Economista). Universidad de Cuenca.
- Pásara, L. (2014). Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana. Fundación para el Debido Proceso. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Instituto de Defensa Legal.
- Real Academia Española. (1992). Diccionario de la lengua española. Espasa Calpe.
- Valle, C. (2007). Estudios sobre la independencia judicial y el proceso penal. Editorial Jurídica Grijley.
- Zambrano, L. (2011). Del estado constitucional al neoconstitucionalismo, El sistema Interamericano de DD.HH. A través de sus sentencias. Editorial Edilex S.A.
- Zavala Egas, J. (2009). Apuntes sobre neoconstitucionalismo. Acciones de protección y ponderación, Acción de Inconstitucionalidad. Proceso Constitucional, 11.